



## PRESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO.

## DECRETOS.

En las publicaciones oficiales de trabajos astronómicos y geográficos hechos por diferentes establecimientos científicos de España se observa que no es el mismo para todos ellos el primer meridiano ú origen de las longitudes geográficas.

Esta irregularidad, que ocasiona numerosas reducciones de uno á otro meridiano, nos presenta en situacion excepcional respecto á las demás naciones, cada una de las cuales ha elegido para todos sus trabajos científicos un origen comun de longitudes, dando así la conveniente unidad á sus publicaciones, ya que no haya llegado todavía el caso de reducir el número de estos orígenes hasta adoptar un primer meridiano todas las naciones civilizadas.

Desechados los meridianos de la Isla de Hierro y del Observatorio astronómico de Cádiz, se refieren las longitudes en las publicaciones modernas, unas veces al Observatorio de Madrid y otras al de San Fernando, entre los cuales debe elegirse uno que sea definitivamente el origen de las longitudes para todos los trabajos geográficos que se ejecuten ó publiquen por cuenta del Estado.

En atención á las razones que anteceden, expuestas por el Vicepresidente de la Junta general de Estadística, y como Presidente del Poder Ejecutivo,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crea una comision encargada de proponer entre los meridianos de Madrid y de San Fernando el que en su concepto deba adoptarse por todas las dependencias de la nacion como primer meridiano de España para contar las longitudes geográficas.

Art. 2.º Serán miembros de esta comision D. José Emilio de Santos, Jefe superior de Administración y Diputado á Cortes; D. Francisco de Paula Marquez, Brigadier de la Armada y Director del Observatorio de Marina de San Fernando; D. Francisco Chacon y Orta, Brigadier de la Armada y Director de Hidrografía; D. Antonio Aguilar y Vela, Académico de Ciencias y Director del Observatorio de Madrid; D. Carlos Ibañez, Vocal de la Junta general de Estadística, Coronel de Ingenieros y Académico de Ciencias; D. Eduardo Benot, Diputado á Cortes, y D. José Morer, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Académico de Ciencias. La Presidencia de esta Junta y la Secretaría serán desempeñadas por las personas que designen los Vocales, de cuya eleccion se dará cuenta inmediata á esta Presidencia, así como del resultado definitivo de estos trabajos.

Madrid treinta de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve.

*El Presidente del Poder Ejecutivo,  
y del Consejo de Ministros,  
FRANCISCO SERRANO.*

Conformándose el Poder Ejecutivo con lo propuesto por el Ministro de la Gobernacion, y de acuerdo con el dictamen de la Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado, viene en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede á D. Marcial Félix Guicheuné y Buclard, súbdito francés, la nacionalidad española que tiene solicitada, entendiéndose que esta ha de ser de las llamadas de cuarta clase con arreglo á las leyes.

Art. 2.º La expresada concesion no producirá efecto hasta tanto que el interesado preste juramento de fidelidad al Poder Ejecutivo de la Nacion y de obediencia á las leyes, con renuncia de todo pabellon extranjero.

Dado en Madrid á treinta de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve.

*El Presidente del Poder Ejecutivo,  
FRANCISCO SERRANO.*

## MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

## DECRETO.

El número extraordinario de los Ayuntamientos que desde principios del año corriente han solicitado la facultad de convertir en títulos al portador las inscripciones intrasferibles correspondientes al 80 por 100 de sus Propios ha venido á justificar plenamente el decreto expedido por este Ministerio en 27 de Noviembre último, probando á la vez cuán útil puede ser aquel extraordinario recurso en la precaria situacion de nuestra agricultura y de nuestra industria.

El Gobierno Provisional, entregando á los pueblos sin limitacion ni restriccion alguna el derecho de convertir primero y enajenar despues las inscripciones intrasferibles que les correspondan ó puedan corresponderles, y devolviéndoles sin la menor intervencion aquellos valores en momentos difíciles y angustiosos, hubiera incitado á los actuales Municipios para que vivieran de lo porvenir, y para que, agotando en un breve período recursos que son permanentes por su naturaleza, dejaran á sus sucesores privados de todo medio eficaz para dominar en lo sucesivo crisis como la actual.

Más previsora la Administración, se limitó en el decreto mencionado á satisfacer una necesidad apremiante buscando dentro de los mismos Ayuntamientos recursos para comenzar trabajos útiles y para aliviar á los labradores agobiados por la carencia de cosechas; quiso, en una palabra, ántes movilizar que comprometer la riqueza que muchos pueblos tenían á su disposicion en las inscripciones in-

trasferibles que por el 80 por 100 de sus Propios habian recibido ó debian recibir en un breve plazo. A favor de aquella facultad, y dando trabajo á las clases jornaleras, se han iniciado en muchísimos pueblos desde principios del año corriente obras públicas que mejoran notablemente las condiciones de aquellos, y crean así una riqueza tan positiva como las inscripciones mismas; y por otra parte se han adelantado á los labradores necesitados cantidades que, con no despreciable interés, volverán á ingresar en los fondos municipales, aliviando de paso los sufrimientos que por punto general afligen á nuestros agricultores.

Desgraciadamente no han desaparecido aun, ni puede esperarse que muy luego desaparezcan, todas las causas que provocaron el decreto ántes mencionado. El estado de los campos inspira todavía inquietud en algunas comarcas. El plazo señalado para que los Ayuntamientos pudieran acogerse al decreto de 27 de Noviembre espiró en 31 de Enero próximo pasado; y no obstante, son muchos los Municipios que acuden á este Ministerio solicitando autorizacion para cambiar sus inscripciones en títulos y enajenar despues estos valores; facultad que sólo puede hoy concederse, en contados casos, con los pesados y embarazosos trámites que exigia una legislación centralizadora, establecida para tiempos y circunstancias enteramente normales.

Por todas estas consideraciones; deseando mejorar en lo posible la situacion de los pueblos agrícolas y la de las clases jornaleras, y sin perjuicio de las medidas que respecto al 80 por 100 de Propios puedan adoptarse ó proponerse ulteriormente por este Ministerio; usando de las facultades que me corresponden como individuo del Poder Ejecutivo y Ministro interino de la Gobernacion, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se amplía hasta el 30 de Junio próximo la facultad concedida á los Ayuntamientos por el art. 4.º del decreto del Gobierno Provisional de 27 de Noviembre último, y el plazo señalado en el art. 13 del mismo decreto para la instruccion de los expedientes con que aquella autorizacion debe solicitarse.

Art. 2.º Las formalidades y trámites á que deben sujetarse los expedientes citados durante la próroga que se concede serán precisamente las mismas que se previenen en aquel decreto, cuidando las Diputaciones provinciales de emitir para cada pueblo el informe concreto y razonado que corresponda, con vista de los presupuestos municipales, en los casos en que este exámen pueda verificarse.

Art. 3.º Los Ayuntamientos, al instruir los oportunos expedientes, consignarán claramente el capital representado por las inscripciones que desean convertir, así como la suma que destinan á obras y la que piensan consignar á préstamos, expresando además si dichas inscripciones ó los Propios de que proceden se hallan afectos á alguna hipoteca ó deuda especial.

Madrid treinta de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve.

*El Ministro interino de la Gobernacion,  
MANUEL RUIZ ZORRILLA.*

## MINISTERIO DE FOMENTO.

## DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por la Direccion general de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio, y con el dictamen emitido por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, el Poder Ejecutivo ha resuelto lo siguiente:

Artículo 1.º Se declaran de utilidad pública para los efectos de la ley de 17 de Julio de 1836 las obras que ha proyectado D. Manuel Perez y Gamuza, vecino de Madrid, con objeto de derivar del rio denominado Aguas las invernales y de aluvion, conducir las por medio de un canal á la hoya ó pantano natural que existe en el término de Almodínel, provincia de Zaragoza, y aplicarlas despues al riego de varios terrenos del mismo pueblo y los de Zaida y Azaila.

Art. 2.º Queda autorizado D. Manuel Perez y Gamuza para ejecutar las referidas obras con arreglo á la Memoria y planos suscritos por el Arquitecto D. Juan Antonio Atienza y bajo la inspeccion del Ingeniero Jefe de la provincia.

Art. 3.º Se dispondrá la toma ó derivacion de manera que no pueda entrar en el canal mayor cantidad de agua que la de 20 metros cúbicos por segundo, y de ningún modo la que actualmente se utiliza en los riegos legítimamente establecidos en la parte inferior.

Art. 4.º En el cruce del canal de distribucion con la carretera de Zaragoza á Alcañiz ejecutará el concesionario la obra que determine el Ingeniero Jefe mencionado con objeto de que quede libre y expedito el tránsito público.

Art. 5.º Queda obligado el concesionario á principiar las obras en el plazo de seis meses, á conducir las dentro de dos años y á conservarlas despues en buen estado.

Art. 6.º En el término de 15 dias, contados desde esta fecha, se consignará en la Caja general de Depósitos el 4 por 100 del presupuesto de las obras, segun previene la ley de 3 de Agosto de 1866.

Art. 7.º Si el concesionario faltare á alguna de las condiciones que preceden, se entenderá caducada esta autorizacion.

Art. 8.º Mientras no estén ejecutadas las obras no se podrá trasferir la concesion sin el consentimiento y aprobacion del Gobierno.

Art. 9.º Esta autorizacion se entenderá concedida á perpetuidad y con la libertad de tarifas que se establece en el decreto de 14 de Noviembre del año último, pero sin derecho para pedir al Estado subvencion de ningún género.

Art. 10. Disfrutará el concesionario de todos los beneficios y privilegios otorgados á las empresas de esta clase por la legislacion vigente, quedando tambien sujeto á las obligaciones que en la misma se establecen.

Madrid veintiocho de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve.

*El Ministro de Fomento,  
MANUEL RUIZ ZORRILLA.*

## MINISTERIO DE ULTRAMAR.

## DECRETO.

Reconocida la necesidad de una escrupulosa revision de los expedientes de todos los individuos comprendidos bajo la denominacion de clases pasivas civiles, que por una cantidad respetable vienen figurando en el presupuesto de gastos del Estado, el Ministerio de Hacienda ocurrió á esta necesidad reclamada por la justicia, é imperiosamente exigida por el estado angustioso del Tesoro, publicando con fecha 22 de Octubre del año último el decreto de revision, y fijando las reglas á que esta debia ajustarse al examinar y apreciar los servicios prestados y los derechos adquiridos en la Península por los funcionarios públicos.

Consignados en diferentes disposiciones legislativas los derechos de los individuos que consagraron al servicio del Estado la mejor parte de su vida, siempre serán dignos de respeto, por más que las vicisitudes de los tiempos hayan elevado hasta una cifra desconsoladora el guarismo que hoy representa esta obligacion; pero por lo mismo que son respetables, y serán religiosamente respetados, los derechos legítimos nacidos al amparo de las leyes, es igualmente justo que se corrijan y extirpen de raíz cuantos abusos hayan podido cometerse en la declaracion de derechos pasivos civiles, lo mismo los inspirados por un exagerado sentimiento de compasion hacia la desgracia de un funcionario desvalido ó de su familia desamparada, como los debidos á una legislacion incompleta y jurisprudencia poco precisa, ó quizá á causas de ménos fácil explicacion.

Acordada la revision, y para que de ella pudiesen obtenerse todos los beneficios resultados que el Gobierno Provisional se proponia, era indispensable hacerla extensiva á los expedientes de los individuos de las clases pasivas civiles de Ultramar, y de ello se ocupó sin descuido este Ministerio; pero la necesidad de aclarar previamente algunas dudas para evitar entorpecimientos, y para que la revision de los servicios prestados en la Península y en Ultramar pueda llevarse á cabo simultáneamente, y el deseo de examinar con detenimiento cuantos antecedentes se refieren á este asunto, han hecho aplazar hasta hoy la aplicacion á los servicios prestados en Ultramar de las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda despues de acomodadas á la legislacion vigente en aquellas provincias.

Los funcionarios que han prestado y prestan servicios en Ultramar son en su inmensa mayoría peninsulares, y al arrostrar los azares de una navegacion larga y penosa y de una aclimatacion expuesta siempre, peligrosa muchas veces y algunas desgraciada, ó succumben ó contraen enfermedades de curacion difícil cuando no imposible, que destruyen lentamente su existencia: de aquí el número relativamente considerable de jubilados y pensionistas de Monte-pío procedentes de las provincias ultramarinas, y de aquí tambien la necesidad de remunerar en algun modo la suma de sacrificios que aceptan los funcionarios públicos al prestar sus servicios en aquellas regiones.

Y no debe olvidarse, para apreciar con justicia las obligaciones que por clases pasivas figuran en el presupuesto de dichas provincias, que las viudas de los funcionarios que mueren sirviendo en Ultramar tienen por la ley derecho á Monte-pío sin sujecion á tiempo para el regulador de la pension, y lo mismo las madres pobres de los empleados que fallecen sirviendo en aquellas provincias sin dejar viuda ni huérfanos que le sobrevivan, como tampoco que aun hoy pesan sobre las cajas de Ultramar muchas pensiones nacidas de servicios prestados en las posesiones que fueron un tiempo españolas, y cuya independencia hemos reconocido posteriormente, y otras varias concedidas á familias de emigrados que siguieron nuestra suerte en América y continuaron fieles á la bandera de España.

Acaso por estas razones la revision de los expedientes de clases pasivas civiles de Ultramar, por más que se lleve á cabo con el mayor celo y escrupulosidad, no produzca las economías que fueran de desear; pero aun en este caso, y sea cualquiera la importancia de la reduccion que en el expresado gasto se obtenga, en ella estará siempre representado el desagravio de las leyes y la represion de los abusos.

Fundado en las consideraciones indicadas, y aceptando para los servicios prestados en las provincias ultramarinas, en cuanto le son aplicables, las disposiciones adoptadas para los

prestados en la Península, el Poder Ejecutivo decreta lo siguiente:

Artículo 1.º Se procederá á una revision general de todos los expedientes relativos á individuos que pertenezcan á las clases pasivas civiles de las provincias de Ultramar, sujetándose á las leyes generales y especiales vigentes sobre la materia y á las disposiciones de este decreto, con exclusion de las reales órdenes dictadas para casos especiales y jurisprudencia establecida que estén en oposicion con el texto de dichas leyes y decreto.

La revision producirá sus efectos desde la fecha en que el Tribunal de primera instancia de Clases pasivas pronuncie su fallo en cada uno de los expedientes revisados.

Quedará únicamente exenta de revision la clasificacion hecha á favor del interesado que haya obtenido mejora en virtud de decreto-sentencia del Consejo de Estado.

Art. 2.º Para que la revision ofrezca garantías de acierto, se compulsarán previamente todos los documentos cuya legitimidad pueda ser dudosa á juicio del Tribunal. Las partidas sacramentales que se hallen en este caso y aparezcan expedidas en cualquiera de nuestras posesiones de Ultramar, se remitirán por conducto de este Ministerio al Contador de la respectiva provincia para que por sí ó por delegado suyo asista á la exacta comprobacion de las matrices y libros parroquiales, firmando los Párrocos y los Contadores ó sus delegados en el mismo documento remitido á compulsa el resultado de la diligencia practicada: las expedidas en puntos del extranjero se remitirán con igual objeto por conducto del Ministerio de Estado á los Agentes consulares; y respecto de aquellas partidas cuyas matrices han desaparecido por destruccion de los archivos en que se custodiaban ú otras causas, se admitirá la justificacion conforme á la ley de Enjuiciamiento.

A las Direcciones generales de las armas y demás Autoridades militares se pasarán los documentos que se refieran á servicios de su instituto, y al Tribunal de Cuentas los relativos á servicios civiles para la compulsa con las nóminas aprobadas.

Art. 3.º Se aplicarán con escrupulosidad las disposiciones contenidas en el decreto de las Cortes de 12 de Mayo de 1837, comunicado á los Intendentes de las provincias ultramarinas en 23 del mismo, respecto á pensiones remuneratorias y de gracia concedidas hasta ahora; y se eliminarán de las nóminas respectivas desde la publicacion de este decreto todas aquellas cuyo deslinde, calificacion y trasmision no se hubiesen verificado con sujecion estricta á las reglas establecidas en dicho decreto, ó que no hayan sido concedidas con posterioridad al mismo por leyes especiales.

Art. 4.º Para la apreciacion de servicios prestados en las provincias de Ultramar, y para la declaracion de derechos pasivos á los empleados civiles cesantes y jubilados de las mismas, se aplicarán las reglas siguientes:

1.º Será abonable en las clasificaciones como base ó arranque de carrera y como tiempo de servicio el prestado en propiedad y destino de planta reglamentaria por nombramiento de Autoridad competente y con anterioridad al *cumplase* puesto en las provincias de Ultramar al decreto de 26 de Octubre de 1849, que hizo extensivas á las mismas las reglas generales sobre clases pasivas contenidas en la ley de 26 de Mayo de 1835, y el artículo 3.º de la de 23 del mismo mes de 1845.

2.º Los servicios prestados en las provincias ultramarinas con posterioridad á la publicacion en ellas del decreto de 26 de Octubre citado sólo serán abonables reuniendo las circunstancias de haber sido prestados en propiedad, con nombramiento real ó de las Cortes, y despues de la edad de 16 años.

3.º Como excepcion de la regla anterior, serán abonables, pero sólo en concepto de continuacion de servicio, los prestados en destinos cuya provision correspondia á la Corona y fué delegada en los Gobernadores Superintendentes de las provincias de Ultramar por el real decreto de 24 de Octubre de 1859, á los funcionarios que habian servido anteriormente con nombramiento real y están comprendidos en el art. 2.º del mismo decreto.

4.º Se abonará tambien en clasificacion á los empleados de Ultramar que con nombramiento real ó de las Cortes se embarcaron en la Península, en el extranjero ó en cualquiera provincia ultramarina para hacer viaje directo á la de su destino, el tiempo transcurrido desde el día del embarque, previa la justificacion oportuna, siempre que con posterioridad hayan tomado la posesion personal; y lo mismo en el caso de imposibilidad absoluta de tomarla por fallecimiento en viaje ó travesía, ó por otra causa extraña y superior á la voluntad del interesado.

5.º Con arreglo á lo dispuesto en el decreto de 21 de Noviembre de 1854, seguirá abonándose á los empleados de Ultramar, como continuacion de servicio, la mitad del tiempo que hayan estado en uso de licencia para Europa por enfermos, siempre que contasen más de tres años y ménos de 10 de servicios en aquellas provincias al empezar ó hacer uso de la licencia; y todo el tiempo de esta á los que en igual época contasen más de 10 años de servicios en Ultramar, con tal que las licencias no hayan excedido de 48 meses para los empleados de Filipinas, y de un año para los de las Antillas y Fernando Poó, las concedidas con anterioridad á la publicacion del re-

glamento orgánico de 3 de Junio de 1866, y de los plazos marcados en este reglamento las otorgadas con posterioridad á su publicacion.

6.º Los servicios prestados en propiedad en las plazas de Oficiales de Negociado de quinta clase, creadas por el reglamento orgánico de las carreras civiles de la Administración pública de Ultramar, y clasificadas como tales en los presupuestos de 1866 á 1867 y siguientes, serán abonables como base de carrera y tiempo de servicio; y el sueldo señalado en presupuesto á dichas plazas podrá ser tambien regulador del haber pasivo de los interesados ó sus familias, aun cuando algunos de estos hubiesen obtenido sus nombramientos de los Gobernadores superiores civiles en virtud de las facultades que les otorgó el real decreto de 24 de Octubre de 1859.

7.º El abono de ocho años de carrera, de que tratan las leyes de presupuestos de 1833 y 1862, se hará únicamente á aquellos funcionarios expresamente determinados en las mismas, siempre que hubiesen desempeñado sus empleos en propiedad y con los demás requisitos prevenidos.

Art. 5.º Segun lo dispuesto en el decreto de 1.º de Octubre de 1856, los empleados nombrados para las provincias de Ultramar, ó ascendidos en las mismas con posterioridad á la indicada fecha, no podrán adquirir derecho á cesantía ó jubilacion sobre las cajas de aquellas provincias si no reúnen á las demás circunstancias que las disposiciones vigentes exigen la de haber servido en Ultramar seis años completos, excluyendo el tiempo de licencia para la Península.

Art. 6.º Los servicios militares se apreciarán con arreglo á lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en su decreto de 22 de Octubre del año último.

Art. 7.º Ningun sueldo militar puede servir de tipo regulador en clasificaciones civiles que hayan de producir declaracion de derechos por razon de cesantías, jubilaciones, viudedades y orfandades civiles, sino el mayor disfrutado en esta clase por el tiempo y con las circunstancias necesarias al efecto.

Art. 8.º Desde la publicacion en Ultramar del decreto de 13 de Mayo de 1859, que hizo extensivas á aquellas provincias las disposiciones de la ley de 25 de Julio de 1855, servirá como sueldo regulador en las declaraciones de haber de cesantía, jubilacion y Monte-pío el del empleo de planta, y nombramiento real ó de las Cortes, desempeñado en propiedad al ménos por el espacio de dos años, con el goce del haber señalado al mismo dentro de los presupuestos respectivos. El sueldo menor disfrutado ántes ó despues no se tendrá en cuenta en ningún caso para fijar el tipo regulador, pues sólo el sueldo mayor será acumulable á los inferiores para completar los dos años.

Art. 9.º Con arreglo á lo dispuesto en el mismo decreto, los empleados que hayan pasado á situacion pasiva ántes ó despues de haber servido dos años el destino por que pretendan clasificarse, pero sin completar los seis de residencia en aquellos dominios, serán clasificados tomándose por regulador el sueldo proporcional de 4 por 10, y percibirán por las cajas de la Península sus haberes. El sueldo máximo regulador de Ultramar no podrá exceder de 8,000 escudos, y los haberes por cesantía ó jubilacion tampoco podrán pasar de 4,000 escudos anuales.

Art. 10. Los Alcaldes mayores de las Islas Filipinas nombrados para servir en Ultramar con anterioridad á la publicacion del reglamento orgánico de 3 de Junio de 1866 continuarán teniendo como reguladores del haber pasivo los sueldos señalados con tal objeto por el decreto de 30 de Julio de 1860.

Art. 11. Los empleados nombrados para servir en Ultramar con posterioridad á la fecha del reglamento orgánico de 3 de Junio de 1866, y lo mismo sus madres, viudas y huérfanos, sólo tendrán derecho al haber ó pension que les corresponda con arreglo al sueldo señalado al destino del causante en los presupuestos de 1866 á 1867 y sucesivos, y al beneficio de una tercera parte más ó del duplo, segun los casos, conforme á lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del art. 106 del expresado reglamento.

Art. 12. Todo aumento de sueldo que obtengan ó hayan obtenido los funcionarios públicos de Ultramar sin cambiar de destino será considerado siempre como un ascenso para los efectos del art. 14 de la ley de presupuestos de 1855.

Art. 13. En ningún caso constituirán parte del sueldo personal que haya de servir de regulador los gastos de representacion ó cualesquiera otros emolumentos, aun cuando aparezcan englobados en una misma partida en los presupuestos.

Art. 14. La jubilacion constituye la separacion definitiva del servicio activo. Todo funcionario que despues de jubilado hubiese vuelto al servicio activo en cualquiera de las carreras del Estado no tiene derecho á mejorar la clasificacion que se le haya practicado en aquel concepto, ya por razon de los nuevos servicios prestados, ya por el sueldo disfrutado en consideracion á los mismos.

Art. 15. Se aplicarán estrictamente los reglamentos de Monte-pío aprobados para las provincias de Ultramar en 7 de Febrero de 1770 y 18 de igual mes de 1784; el art. 21 de la instruccion de 26 de Diciembre de 1831, hecho extensivo á las provincias ultramarinas por real orden de 23 de Octubre de 1841, y